

Reestructurando el estado industrial: el caso de la privatización de la DiNIE, 1955-1962\*

Claudio Belini\*\*

### Introducción:

Luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón, en septiembre de 1955, se reanudaron los debates en torno al papel del estado en la industrialización. Estas discusiones comenzaron cuando Raúl Prebisch recomendó, en un informe requerido por el gobierno de la “Revolución Libertadora”, el restablecimiento de la iniciativa privada como fuerza impulsora de la economía argentina.

Sin embargo, la redefinición del papel del estado en la industrialización no avanzaría considerablemente hasta comienzos de los años sesenta. El gobierno del general Pedro Eugenio Aramburu se vio sumergido en las querellas entre los grupos estatistas y nacionalistas y quienes alentaban la liberalización económica, así como las pujas entre los partidos políticos que ambicionaban sucederlo en el poder. El triunfo electoral de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y el giro emprendido por el presidente Arturo Frondizi en diciembre de 1958, darían lugar a una nueva estrategia económica basada en el aliento a la industrialización por medio del ingreso de capitales extranjeros. En este marco, el papel del estado comenzó a quedar relegado a la tarea de proveer el capital social fijo a fin de que la iniciativa privada promoviera el desarrollo de las fuerzas productivas.

El objetivo de este artículo es analizar el surgimiento de esta nueva concepción a través de la evolución de la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DiNIE), un organismo

---

\* Una versión previa fue presentada en el Seminario “La empresa ayer y hoy. Nuevas investigaciones y debates”, Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo, Facultad de Ciencias Económicas, UBA, junio del 2005. Agradezco los comentarios de Marcelo Rougier y Jorge Schvarzer, así como los realizados previamente por Juan Carlos Korol e Hilda Sabato.

\*\* Investigador del CONICET con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. Programa de Estudios de Historia Económica y Social Americana, Facultad de Filosofía y Letras, UBA / Puán 480, 4 piso Of. 419/ 1046 Buenos Aires/ Dirección electrónica: cfbelini@ciudad.com.ar.

creado en 1947 que agrupaba a las empresas de “propiedad enemiga” intervenidas en 1945, a las firmas británicas nacionalizadas en 1948 y otras creadas por Perón con el fin de sustituir importaciones<sup>1</sup>. Afectado por conflictos de orden legal y limitado en su accionar por la nueva concepción en torno al papel del estado, DiNIE inició una etapa caracterizada por los intentos de racionalización y privatización de sus empresas.

La experiencia de la DiNIE ha sido motivo de exiguo interés por la historiografía, especialmente para la etapa iniciada a partir de 1958. Las escasas referencias a su accionar señalan que luego de la devolución de las patentes a las compañías alemanas y la venta de las empresas que habían pertenecido al “capital enemigo”, el organismo desapareció<sup>2</sup>. Sin embargo, su actividad se prolongó hasta las postrimerías del gobierno de Frondizi, cuando tuvo lugar la privatización de la mayoría de sus empresas. Por otra parte, los hacedores de la política económica desarrollista han sostenido que la venta de las empresas respondió al hecho de que éstas no formaban parte del conjunto de actividades industriales o de servicios “con intereses fundamentales del Estado”<sup>3</sup>. En forma paralela, este proceso, que culminó con el traspaso de una veintena de firmas a la actividad privada, habría constituido un éxito y un ejemplo de la racionalización estatal emprendida por la administración Frondizi<sup>4</sup>.

Este trabajo se aparta de esta última interpretación. A partir del análisis de ambos procesos de privatización y del manejo desarrollista del ente industrial, se sostiene que el gobierno de Frondizi se propuso desde un comienzo liquidar al organismo no sólo bajo el argumento de que era necesario concentrar el esfuerzo del estado sobre las industrias básicas, sino

---

<sup>1</sup> Sobre el ente durante el peronismo véase Claudio Belini, “DiNIE y los límites de la política industrial peronista, 1947-1955” en *Desarrollo Económico*, Vol. 41, n° 161, abril junio de 2001, (págs 97-119).

<sup>2</sup> Jorge Schvarzer, *La industria que supimos conseguir*, Bs. As., Planeta, 1996, (págs. 203-204); Celia Szusterman, *Frondizi, la política del desconcierto*, Bs. As., Emecé, 1998, (pág. 186).

<sup>3</sup> Como, por ejemplo, SoMISA. Véase Félix Luna, *Diálogos con Frondizi*, Bs. As., 1963, (pág. 126).

<sup>4</sup> Juan Ovidio Zavala, *Racionalización para el desarrollo*, Bs. As., Depalma, 1991, (págs. 76-80). Zavala se desempeñó como secretario técnico entre 1959 y 1962. Véase también, Antonio Vaquer, *Historia de la ingeniería en la Argentina*, Bs. As., Eudeba, 1968, (págs. 62-65). Vaquer dirigió el ente entre 1955 y 1958.

también a partir de la idea de que era imprescindible reducir el papel del estado y liberar la iniciativa privada a su propio juego. La influencia de las ideas liberales condujo a que el gobierno no se interesara en la racionalización de las empresas y percibiera como única solución su traslado al capital privado, aún sin considerar la necesidad de reorganizarlas para enfrentar con éxito a la competencia del mercado. En este sentido, más que una privatización se trató de un proceso de liquidación de recursos humanos y productivos<sup>5</sup>.

La primera parte de este artículo indaga las discusiones entre diferentes actores económicos y políticos en torno al papel del estado en la industrialización y, en especial, al rol asignado a la DiNIE durante el gobierno de Aramburu. Estas discusiones son analizadas en el contexto de la incorporación de la Argentina al sistema multilateral y las negociaciones con los países miembros del Club de París. La segunda parte estudia la evolución de la DiNIE entre 1955 y 1958, al calor de los intentos oficiales por alentar el incremento de la productividad del sector. En la tercera se aborda, en el marco de una política industrial que privilegiaba la integración vertical del sector industrial mediante la apertura al capital extranjero, la política desarrollista hacia el organismo en el crucial período de remate de las ex empresas alemanas. Por último, en la cuarta parte, se analiza la privatización del grupo DiNIE durante 1961 y se evalúan sus resultados.

#### 1. Debates y realidades en torno al estado industrial durante el posperonismo:

En enero de 1956, la presentación del Plan Prebisch generó ásperas disputas entre la comunidad empresaria, los partidos políticos y el movimiento estudiantil. En el caso de la política industrial, Prebisch proponía una intensificación de la estrategia sustitutiva

---

<sup>5</sup> Esta distinción fue utilizada por Jorge Schvarzer para el ciclo de privatizaciones de la década de 1970. Véase del autor: *La política económica de Martínez de Hoz*, Bs. As., Hyspamérica, 1986, (págs. 266-267).

mediante el desarrollo de la industria siderúrgica, metalmecánica y química básica. En forma paralela, alentaba la racionalización del estado por medio de la privatización de algunas empresas públicas, a cuya cabeza ubicaba las agrupadas en la DINIE<sup>6</sup>.

A estas consideraciones se sumaban los problemas derivados de la nacionalización de las empresas alemanas incorporadas a la DiNIE. Cuando en marzo de 1945 la Argentina declaró la guerra al Eje, adhirió también al acta final de la Conferencia de Chapultepec, que ratificaba las recomendaciones establecidas en 1942 y destinadas al control, vigilancia y liquidación de los bienes “enemigos”. De esta forma, el gobierno argentino dictó una serie de decretos con el fin de regular la incautación y liquidación de la propiedad enemiga, cuyo saldo sería destinado a reparar los daños causados a la Argentina, a sus ciudadanos y a las entidades jurídicas constituidas en el país<sup>7</sup>. Aunque en abril de 1946 el gobierno militar dictó el decreto 11.599 por el cual se determinaba que la liquidación de la propiedad enemiga debía realizarse por medio de licitaciones o el remate público, a principios de 1947 el régimen de Perón dispuso la venta en bloque de un conjunto de empresas industriales al estado, creando la DiNIE<sup>8</sup>. Con ese fin ordenó al Banco Central adelantar a la Junta 100 millones de pesos hasta tanto ésta finalizara la valuación de las empresas.

Esta situación de irregularidad, que abría una incógnita sobre el futuro de las nuevas empresas estatales, se prolongó durante la siguiente década. La reanudación de las relaciones diplomáticas y comerciales con Alemania Occidental a partir de 1951, generó nuevos reclamos para la resolución de las cuestiones pendientes. En 1953, el régimen

---

<sup>6</sup> Sólo se justificaba el control público sobre YPF y los ferrocarriles por su gravitación sobre la economía. Véase, Banco Central de la República Argentina, *Memoria Anual. Año 1955*, Bs. As., 1956, (pág. LIX).

<sup>7</sup> Por medio del decreto 10.935/45 se creó la Junta de Vigilancia y Disposición Final de la Propiedad Enemiga, que sería la encargada de administrar y liquidar los bienes enemigos. Para los antecedentes y las disposiciones argentinas véase Carlos Adrogué, *La propiedad enemiga y la Constitución Nacional*, Bs. As., Depalma, 1946. Sobre la actuación de la Junta véase Adela Harispuru, Jorge Gilbert y Andrés Regalsky, “La Junta de Vigilancia, el estado y la propiedad enemiga” en *Ciclos*, Vol. X, n° 19, 2000, (págs. 103-127).

<sup>8</sup> Belini, op.cit., (págs. 99-100).

peronista respondió mediante la devolución de las patentes alemanas que estando bajo la propiedad de DiNIE no eran utilizadas<sup>9</sup>. En cambio, para aquellas que aún estaban en uso demandó la incorporación de capitales alemanes mediante su integración a las empresas DiNIE o bien la constitución de sociedades con participación alemana, pero con mayoría de capital privado argentino, presumiblemente de empresarios ligados al régimen<sup>10</sup>.

En suma, tanto la redefinición del papel del estado en el estímulo a la industrialización como la resolución de las cuestiones pendientes con Alemania Federal abrían nuevos interrogantes sobre el destino final de la DiNIE. Con el objeto de responder a estas cuestiones, en enero de 1956, Aramburu anunció la creación de una comisión especial en el Ministerio de Industria. La medida causó alarma entre los gerentes, empleados y obreros de DiNIE, quienes respondieron a las recomendaciones de Prebisch mediante un memorial donde señalaban que la venta de las empresas, presumiblemente a favor del capital alemán, redundaría en un retorno a la operatoria comercial que mayoritariamente tenían en 1947, alertando sobre el efecto negativo que tendría la futura remesa de utilidades sobre la balanza de pagos. En forma adicional, señalaron que la valuación oficial de las empresas, unos seiscientos millones de pesos, era notoriamente baja y sólo serviría para paliar muy tenuemente el déficit fiscal<sup>11</sup>.

La respuesta oficial provino del ministro de Industria Álvaro Alsogaray, un ex capitán e ingeniero devenido en fervoroso partidario del liberalismo económico, quien confirmó que el régimen militar había decidido resolver el problema DiNIE mediante negociaciones con el

---

<sup>9</sup> Decreto 2.796 /53 en *Anales de Legislación Argentina* (en adelante *ALA*), 1953, (págs. 436-439).

<sup>10</sup> A fines de 1954, el directorio de DiNIE creó una comisión para atender las propuestas de adquisición de algunas de sus empresas. Ministerio de Industria, *Informativo Mensual*, Año 1, n° 1-5, 1954, (pág. 29).

<sup>11</sup> DiNIE, *Origen, evolución y perspectivas de la DiNIE*, Bs. As., 1956, (págs. 17-18); “DiNIE: una familia amenazada” en *Qué sucedió en siete días*, 22 de febrero de 1956, (pág. 11).

gobierno de Bonn. Además, aclaró que se pondrían en venta las empresas que estuvieran en condiciones de pasar a manos privadas<sup>12</sup>.

Estas definiciones comenzaron a tomar forma por medio de negociaciones entre la Cancillería y el director del departamento económico de la embajada alemana. A mediados de abril, arribó una misión especial alemana que se entrevistó con el presidente Aramburu. Poco después se anunció que se habían alcanzado “considerables progresos”<sup>13</sup>.

El enfoque privatizador no fue empañado por las crisis ministeriales provocadas por las divergencias entre los partidarios de una liberalización extrema y quienes alentaban un desmantelamiento gradual del complejo sistema de intervención estatal peronista. Así, por ejemplo, el reemplazo de Alsogaray por Rodolfo Martínez, un ingeniero vinculado al ministro de Hacienda de extracción radical Eugenio Blanco, no modificó la intención oficial tendiente a la devolución de las empresas que habían pertenecido al capital alemán<sup>14</sup>.

En realidad, la resolución del problema de la propiedad alemana se convirtió en un tema clave para el éxito de la propuesta del gobierno militar de incorporación de la Argentina al régimen multilateral de pagos y comercio, y su ingreso al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos objetivos, propuestos por Prebisch, requerían la negociación de las deudas argentinas que, para septiembre de 1955, ascendían a unos 757 millones de dólares.

Las tratativas se habían iniciado en abril de 1956 y posibilitaron, un mes más tarde, un acuerdo inicial que se conoció como el Acta de París, por medio del cual la Argentina reimplantó el sistema multilateral con nueve países<sup>15</sup>. Sin embargo, los negociadores argentinos tropezaron con la posición del gobierno de Bonn, que no aceptaba una

---

<sup>12</sup> *Clarín*, 5 de abril de 1956, (pág. 4). Sobre la privatización de la planta automotriz de DINFIA, véase *Clarín*, 8 de abril de 1956, (pág. 4).

<sup>13</sup> *Boletín de la Cámara de Comercio Argentino Alemana* (en adelante, *BCCAA*), n° 51-52, 1956, (pág. 260).

<sup>14</sup> *BCCAA*, n° 53, 1956, (pág. 310).

<sup>15</sup> En este tema sigo a Raúl García Heras, “La Argentina y el Club de París: comercio y pagos multilaterales con la Europa occidental, 1955-1958” en *Trimestre Económico*, oct-dic de 1996, (págs. 1227-1308).

modificación del régimen comercial sin una previa negociación sobre el monto de la deuda argentina. Además, Alemania Federal consideraba imprescindible una aclaración sobre el status de la DiNIE y de las firmas interdictas en diciembre de 1955 bajo la sospecha de graves maniobras de corrupción cometidas durante el gobierno peronista<sup>16</sup>. Dado que Alemania Federal era acreedora del 40 % de la deuda argentina con Europa Occidental, y que gran parte de la misma pertenecía a grandes firmas privadas de ese país, un acuerdo con Bonn era imprescindible a fin de lograr los objetivos propuestos.

En agosto, una nueva delegación argentina fue enviada a Europa. La misión recibió la advertencia de los negociadores británicos y franceses que la aprobación definitiva del acuerdo multilateral dependía de la anuencia de Alemania Federal. Cuando los argentinos arribaron a ese país, se encontraron con una dura posición negociadora. Los alemanes demandaron la resolución de la cuestión DiNIE y las firmas interdictas. Sin poder negociar sobre estos aspectos, los enviados argentinos fracasaron en su intento de obtener una consolidación de la deuda a diez años y obtener nuevos créditos. Tras dos semanas de deliberaciones, en las que ni siquiera se arribó a un acuerdo sobre el monto de la deuda argentina, las conversaciones se aplazaron<sup>17</sup>.

Mientras tanto, en Buenos Aires, la perspectiva de una solución sobre las empresas nacionalizadas y las interdictas disminuían. En julio, Robert Bosch A.G. había anunciado su retiro definitivo de Inyector Magnet S.A., una empresa que se proponía fabricar equipos de inyección para motores diesel mediante el uso de patentes y marcas en posesión de la DiNIE. La firma había sido interdicta debido a que su capital pertenecía mayoritariamente a

---

<sup>16</sup> Véase, *BCCAA*, n° 54, 1956, (pág. 360) y García Heras, op. cit., (pág. 1288). Las firmas alemanas intervenidas eran Mercedes Benz, Farh, Hanomag, Deutz, Inyector Magnet, Borgward y Siemens. Las cinco primeras se habían instalado en el país asociadas al empresario peronista Jorge Antonio. Véase mi tesis “La Industria durante el primer peronismo 1946-1955: un análisis de las políticas públicas y su impacto”, Bs. As., Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2003, Vol. 2.

<sup>17</sup> *BCCAA*, n° 55-56, 1956, (págs. 425-426).

Jorge Antonio. La decisión del retiro era tomada luego del reiterado fracaso de las tratativas con el gobierno argentino destinadas a adquirirla. A su vez, en septiembre, se había condenado a Siemens Argentina S.A. por el incumplimiento de un contrato firmado en 1954 entre la casa matriz y DiNIE mediante el cual esta última devolvía el paquete marcario por un precio simbólico a condición de que se formara una sociedad en la que el capital argentino participara con no menos del cuarenta por ciento<sup>18</sup>.

La cuestión no se destrabó hasta enero de 1957 cuando una nueva crisis de gabinete desplazó al ministro Blanco, quien al parecer consideraba que el sistema multilateral podía funcionar sin un acuerdo con Alemania Federal, por el economista liberal Roberto Verrier y poco después por Adalbert Krieger Vasena<sup>19</sup>. Sólo entonces, se aceleraron las negociaciones mediante el envío de una nueva misión a Alemania Federal. Las tratativas fueron expeditivas y culminaron un mes y medio más tarde, en junio de 1957, con la firma del Acuerdo de Bonn. Por medio del mismo el gobierno alemán se integraría al Club de París, como se denominaba al grupo de naciones firmantes del Acta de París, y al sistema multilateral de pagos e intercambio. A cambio, el gobierno argentino se comprometía, en primer lugar, a la devolución incondicional de marcas y patentes de origen alemán en seis meses, incluyendo a las que estaban en posesión de la DiNIE. En segundo lugar, se obligaba a vender las empresas incorporadas a la DiNIE en un período de 210 días. La base de los remates sería establecida por los ex propietarios por medio de ofertas en firme. Con ese fin, se los autorizaba a acceder a las empresas y consultar su documentación comercial. En el caso en que no se presentaran propuestas en firme o que el gobierno no las aceptara, una comisión mixta de peritos establecería la base con la que las empresas saldrían a remate

---

<sup>18</sup> BCCAA, n° 55-56, 1956, (pág. 434). y *Qué sucedió en siete días*, 5 de noviembre de 1958, (pág. 18).

<sup>19</sup> BCCAA, n° 58, 1957, (págs. 98-99); García Heras, op. cit., (págs.1298-1300).



público. El producto total de las ventas sería distribuido entre la Comisión Argentino Alemana, cuyo fin era resolver el problema de la propiedad enemiga y abonar las indemnizaciones causadas durante la guerra, y el gobierno argentino, previo peritaje sobre el valor de los bienes incautados en 1945 y lo incorporado con posterioridad<sup>20</sup>.

De esta manera, la Argentina resolvía el problema de la propiedad enemiga. El 21 de noviembre, Aramburu dictó dos decretos destinados a poner en marcha las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Bonn<sup>21</sup>. Seis días más tarde, se firmaron los convenios comerciales y de consolidación de deudas con los once países miembros del Club de París. La deuda argentina ascendía a poco más de 441 millones de dólares, de los cuales el treinta y seis por ciento -158 millones- pertenecía a Alemania Federal. Cerca del ochenta por ciento de la deuda con ese país era privada<sup>22</sup>.

En resumen, a finales de 1957, el gobierno argentino había logrado alcanzar un acuerdo con Bonn sobre la propiedad declarada enemiga en 1945. Por medio de él, Argentina se comprometía a la devolución incondicional de marcas y patentes, y a la venta pública de las ex empresas alemanas. La primera medida deprimía considerablemente el patrimonio de las empresas, marcando un cambio radical en la posición sustentada por el régimen de Perón<sup>23</sup>.

El gobierno militar también intentó avanzar en la privatización de las otras empresas industriales. En mayo de 1957, se realizó una licitación a fin de vender la planta de tractores de Córdoba, pero sólo se presentó una firma que ofreció adquirirla a su precio base, tras lo cual se decidió dejar en suspenso la privatización<sup>24</sup>. En realidad, el conjunto de

---

<sup>20</sup> Véase el texto del acuerdo en *BCCAA*, n° 62, julio-agosto de 1957, (págs. 234-236).

<sup>21</sup> Decretos 15.364 y 15.365 en *A.L.A.*, 1957, (págs. 933-938).

<sup>22</sup> *BCCAA*, n° 66, diciembre de 1957, (pág. 409). También se levantaron las interdicciones contra Siemens Argentina y Borgward, y se anularon los contratos firmados por Perón con Fahr, Deutz y Hannomag para la fabricación de tractores. Véase decretos 15.385 y 15.386 en *A.L.A.*, 1957, (págs. 939-942).

<sup>23</sup> Juan Carlos Esteban y Luis Tassara, *Valor industrial y enajenación de DiNIE*, Bs. As. 1958, (págs.130-137).

<sup>24</sup> *BCCAA*, n°62, julio-agosto de 1957, (pág. 256).

empresas públicas heredadas del régimen de Perón no pudo ser desarticulado por la dictadura de Aramburu. En parte por las polémicas que despertaba la aplicación de estas medidas, pero también por estado en que se encontraban algunas de esas empresas.

## 2. La política de racionalización de la DINIE, 1955-1958:

A partir de septiembre de 1955 el ingeniero Antonio Vaquer, interventor y luego vicepresidente de la DiNIE, se propuso racionalizar el ente, incrementar la productividad obrera y alentar la instalación de nuevas industrias. Estos objetivos tenían sus antecedentes en los años finales del peronismo, aunque no habían logrado ser implementados debido a la resistencia que los programas de racionalización del trabajo encontraban en el movimiento obrero, las conflictivas relaciones entre el ente y los industriales, y la desvirtuación de algunos proyectos a favor de grupos empresarios vinculados con Perón. Como veremos, en los años subsiguientes, se presentarían nuevos obstáculos a estos propósitos.

En primer lugar, el directorio se concentró en la tarea de racionalizar el organismo. Así se eliminaron algunas líneas de producción que, como la de motores diesel, comenzaba a ser ofrecida por empresas privadas. También se intentó, sin éxito, el traslado a manos provinciales de la Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstica, que operaba mediante la entrega de telares a trabajadores del norte del país<sup>25</sup>.

Mayor suerte tuvo el objetivo de despojar a las empresas de varios privilegios que las empresas DiNIE tenían hasta 1955, como el monopolio de CIFEN para la importación de madera de Brasil, que incrementaban notablemente las utilidades del ente; la preferencia del Banco Central para el otorgamiento de permisos de cambio para la importación de

---

<sup>25</sup> DiNIE, *Reseña de las actividades del organismo desde el 28 de septiembre de 1955*, Bs. As., 1958, (págs. 13-12).

bienes de capital desde Europa del Este; y la primacía en el otorgamiento de las licitaciones oficiales. Todos estos privilegios habían sido objeto de una dura censura empresarial.

Las reformas aplicadas modificaron la participación de las diferentes actividades en el valor de la producción. Como se observa en el cuadro 1, entre 1955 y 1958, el aporte de las actividades metalúrgicas disminuyó del 16 % al 13 % mientras que la participación de la rama textil del 12 % al 14 %. Estos cambios contrariaban los objetivos oficiales que ponían el acento en orientar la producción del grupo DiNIE hacia las industrias de base.

En cambio, la nueva orientación fue eficaz en el freno al incremento de la producción manufacturera, que había generado conflictos con los empresarios durante el peronismo. Así, el volumen físico de la misma se redujo un 5,6 % entre 1955 y 1957. La caída fue bastante mayor (22 %) si se incluye la actividad de las empresas constructoras, que se vieron afectadas por la paralización de los planes de obras públicas<sup>26</sup>.

Otro de los objetivos principales del directorio de DiNIE era incrementar la productividad. Dado que la escasez de divisas imposibilitaba, como en el conjunto de la industria, la importación de maquinarias destinadas a renovar el envejecido stock de capital, era claro que el incremento de la productividad en DiNIE sólo se lograría mediante la intensificación del trabajo.

En febrero de 1956, un decreto autorizó a los empleadores a remover todas las cláusulas de los contratos de trabajo que atentaran contra el incremento de la productividad obrera. A partir de entonces se inició una fuerte ofensiva empresarial que, a pesar de contar con el apoyo oficial, no se tradujo en incrementos significativos debido a la resistencia obrera<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Ídem, (págs. 46-48).

<sup>27</sup> Daniel James, *Resistencia e Integración*, Bs. As., Sudamericana, 1990, (págs. 90-103).

En DiNIE sólo a partir de 1957 comenzaron a ensayarse sistemas de incentivos para el incremento de la productividad obrera. En la mayoría de los casos, estos ensayos se limitaban a algunas secciones de los procesos productivos de las La Química Bayer, Merck, Química Schering, Instituto Behring, Electrodinie, Metaldinie, Ferrodinie, Crisoldinie, Siemens Bauunion, FANDET y la Distribuidora de Frutas Argentinas<sup>28</sup>. Si bien el directorio puso gran acento en los efectos de estos estímulos, los resultados generales no fueron alentadores. Para 1957 la productividad del trabajo en las empresas manufactureras era un 4,5 % superior a 1955. Si se incorporaban las empresas constructoras, el incremento era sólo del 1,9 %, apenas superior al registrado para el conjunto de la industria argentina<sup>29</sup>.

Por último, el tercer objetivo, la implantación de nuevas industrias, no logró ningún progreso. Así, por ejemplo, los proyectos destinados a iniciar la producción de soda solvay e incrementar la de soda cáustica no se concretaron. En 1954, DiNIE había decidido la instalación de una planta integral en San Antonio Oeste mediante la formación de una empresa en asociación con el capital extranjero y los usuarios industriales. La planta tendría un costo de 9 millones de dólares y elaboraría 80.000 toneladas de soda solvay y 20.000 de soda cáustica. Pero luego de 1955, el plan quedó paralizado. En 1956, el Ministerio de Hacienda redujo las partidas presupuestarias y al año siguiente ordenó a la DiNIE “autofinanciar” sus inversiones<sup>30</sup>.

Otros proyectos que se remontaban a los años de Perón, también sufrieron dilaciones similares como, por ejemplo, la instalación de una planta de negro de humo, con un

---

<sup>28</sup> DiNIE, *Reseña...op.cit.*, (págs. 56-83).

<sup>29</sup> Ídem, (pág. 47). Parte del incremento se debió al despido de personal que pasó de 22.653 agentes en 1955 a 18.625 en 1957.

<sup>30</sup> *Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación*, 1959, Vol. 2, (pág. 985)

presupuesto de 2,6 millones de dólares, y la elaboración de aluminio por el proceso electrolítico que Petroquímica proyectaba instalar en Comodoro Rivadavia<sup>31</sup>.

En resumen, entre 1955 y 1958, el directorio de DiNIE intentó implementar una política consistente en la racionalización, la disminución de su personal y la puesta en marcha de sistemas de retribución por productividad a fin de incrementar la misma. Los resultados fueron magros debido a las dificultades económicas y políticas que el gobierno de Aramburu debió enfrentar. Por otra parte, los proyectos de instalación de nuevas industrias también fracasaron. En este caso, las tensiones entre el objetivo de alentar un mayor desarrollo de las industrias de base y la política destinada a reducir el papel del estado en la economía impidieron la transformación del ente en un instrumento de política industrial.

### 3. La política industrial desarrollista y la DiNIE:

La presidencia de Frondizi marcó el inicio de un cambio parcial en la estrategia de desarrollo que el país había adoptado en la segunda posguerra. Frondizi y su grupo hicieron suyos el diagnóstico que señalaba que el principal problema económico argentino residía en la escasa integración de su estructura industrial. Este planteo partía del presupuesto de que dado el persistente deterioro de los términos del intercambio, la industrialización era el único camino viable a seguir<sup>32</sup>. En esta tarea el estado debía cumplir un papel esencial en tanto era el único actor capaz de implementar políticas destinadas a derribar los obstáculos.

Sin embargo, estos conceptos no involucraban la idea de organizar un estado empresario. Por el contrario, dado el desequilibrio de la balanza de pagos y el escaso grado de capitalización interna, Frondizi consideraba esencial apelar al capital privado extranjero a

---

<sup>31</sup> DiNIE, *Reseña de...op.cit.*, (págs. 91-96).

<sup>32</sup> Arturo Frondizi, *Industria Argentina y Desarrollo Nacional*, Bs. As., Ediciones Qué, 1957.

fin de alentar una rápida industrialización. Estas ideas, que involucraban una rectificación del ideario antiimperialista levantado durante la campaña electoral, fueron expuestas en el discurso inaugural de su mandato y comenzaron a ponerse en práctica poco después<sup>33</sup>. Así, en julio de 1958, mientras se iniciaba el remate de las empresas de la DiNIE, el nuevo presidente firmó contratos de explotación petrolífera con compañías extranjeras con el objetivo de alcanzar el autobastecimiento de combustibles. A esta medida, se sumaría, en diciembre de ese año, la firma de un crédito stand by con el FMI a cambio del cual el gobierno desarrollista aplicó un severo programa de estabilización que incluía la eliminación de los controles directos a las importaciones, la devaluación monetaria mediante la instauración del mercado libre de cambios, la supresión de los controles sobre precios y los subsidios, y una política monetaria y fiscal restrictiva<sup>34</sup>.

También fueron sancionadas una nueva ley de inversiones extranjeras y otra de promoción industrial. Por medio de la primera, se otorgaban a los capitales extranjeros los mismos derechos que la Constitución y las leyes concedían a los nacionales y se garantizaba el libre giro de utilidades al tipo de cambio libre, derogando las restricciones impuestas por la ley peronista 14.222/53. Por su parte, la nueva ley de fomento industrial se proponía como un marco legal de promoción bajo cuyo amparo se sancionarían sistemas específicos para la industria automotriz, del papel y la celulosa, de motores de combustión interna y petroquímica, entre otras.

En relación a DiNIE, Frondizi había señalado durante la campaña electoral la necesidad de iniciar conversaciones con Bonn sobre el destino final de las empresas, pero bajo el

---

<sup>33</sup> *Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación (DSCDN)*, 1958, Vol. 1, (págs. 76-77).

<sup>34</sup> Sobre la política desarrollista véase, Eprime Eshag y Rosemary Thorp “Las políticas económicas ortodoxas de Perón a Guido (1953-1963)” en Aldo Ferrer y otros, *Los Planes de Estabilización en la Argentina*, Bs. As., Paidós, 1969; Alberto Petrecola, “Unbalanced Development, 1958-1962” en Guido Di Tella y Rudiger Dornbusch, *The Political Economy of Argentina, 1946-1983*, Mac Millan Press, London, 1989.

entendimiento de que aquellas que fueran imprescindibles para la industrialización quedarían en manos del estado argentino. En cambio, la revista *Qué*, vocera del grupo liderado por Rogelio Frigerio, consideraba que la resolución del problema DiNIE era esencial a fin de estimular la inversión de capital alemán en la industria. En este sentido, toda inversión extranjera que permitiera acelerar la industrialización debía ser bienvenida a fin de romper la dependencia argentina de la industria británica<sup>35</sup>.

El problema de la DiNIE fue el primero que debió afrontar la nueva administración y puso de manifiesto el papel que el desarrollismo quería conferir al estado y al capital extranjero en la industrialización, y la compleja dinámica política que acompañaría la restauración institucional de 1958. Casi un mes después de asumir la presidencia, cuando se acercaba la fecha del primer remate, estallaron las discusiones. El 4 de junio el personal de las 42 fábricas de DiNIE inició paros parciales de 15 minutos “por la demora en que incurre el gobierno en derogar los decretos leyes (de privatización)”<sup>36</sup>. Por la tarde, concurren en manifestación al parlamento donde entregaron un petitorio y anunciaron la formación de una comisión intersindical en apoyo a sus reclamos. Dos días más tarde, delegados gremiales de DiNIE se entrevistaron con Frondizi para exigirle la suspensión de la venta. En la conferencia, el presidente respondió que respetaría los compromisos internacionales asumidos por su antecesor ya que era imprescindible fortalecer la seguridad jurídica, agregando que gobernaría “para todo el país” y no para quienes lo habían votado<sup>37</sup>.

La posibilidad de los trabajadores de conformar un frente sindical se vio rápidamente desbaratado. Aunque a principios de junio las 62 Organizaciones Peronistas habían

---

<sup>35</sup> “Cáscara y sustancia del caso DiNIE” en *Qué sucedió en siete días*, 16 de abril de 1957, (pág. 1).

<sup>36</sup> *Clarín*, 5 de junio de 1958, (pág. 9).

<sup>37</sup> *Clarín*, 7 de junio de 1958, (pág. 8). Los delegados de DiNIE fueron acompañados por dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica, de la Construcción y de la Federación de Trabajadores del Caucho.

declarado que Frondizi debía cumplir con la promesa de mantenimiento de las empresas nacionalizadas<sup>38</sup>, el apoyo gremial se diluyó muy pronto. Cuando a fin de mes Frondizi anunció la firma de los contratos de explotación petrolera, las 62 Organizaciones emitieron un comunicado de apoyo al gobierno. En el mismo se acusaba a quienes agitaban “banderas supuestamente nacionalistas” en las cuestiones de DiNIE y del petróleo, de atentar contra la industrialización del país. Utilizando los argumentos oficiales sobre la necesidad del aporte de capital extranjero, la declaración denunciaba que:

“La agitación gestada en los sectores interesados en mantener sin solución de continuidad el problema energético en nuestro país, ha tomado a las empresas DiNIE como pretexto para trabar la radicación de capitales imprescindibles para nuestro desarrollo. Y se han cuidado muy bien de aclarar que en última instancia *el problema DiNIE es nada más que la opción de su explotación por capitales privados, ya que las empresas están en el país y seguirán en él como fuente de trabajo y como unidades productivas al servicio de la nacionalidad*”<sup>39</sup>

Sin embargo, por detrás de esta coincidencia programática entre los sindicatos peronistas y el frondicismo podían observarse intereses muy concretos; los dirigentes sindicales no estaban interesados en enfrentarse con el nuevo gobierno en un momento en que la sanción de la ley de amnistía política, la devolución de los sindicatos a través de elecciones internas y el tratamiento de una nueva ley de Asociaciones Profesionales, que restauraría el control peronista sobre el movimiento obrero, encontraba acalorados adversarios<sup>40</sup>.

Mientras la política de integración del peronismo permitió a Frondizi eludir, al menos hasta octubre, un enfrentamiento abierto con los sindicatos, el problema DiNIE se convirtió en una de las primeras cuestiones económicas que enfrentó al gobierno con los principales partidos de la oposición. El mismo día de la manifestación obrera frente al congreso, el

<sup>38</sup> *Clarín*, 1 de junio de 1958, (pág. 10).

<sup>39</sup> *Qué sucedió en siete días*, 24 de junio de 1958, (pág. 11).

<sup>40</sup> Para una interpretación que enfatiza la “simpatía ideológica” entre la UCRI y el peronismo, véase James, *op. cit.*, (págs. 147-155).



diputado radical del pueblo Carlos Perette presentó un proyecto de resolución por medio del cual se solicitaba la suspensión de los remates<sup>41</sup>. Poco después, Perette alertó sobre los peligros de la “penetración invisible” del capital imperialista y la disposición de su partido para defender el acervo nacional, entre los cuales ubicaba a la DiNIE<sup>42</sup>.

El 13 de junio la Cámara votó otorgar preferencia para el tratamiento del proyecto de resolución de Perette, así como los dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores. Por fin el 19 de junio, tres días antes del inicio de los remates, el parlamento trató la cuestión. En una larga sesión, el oficialismo y la oposición se lanzaron a una competencia retórica en defensa del ente estatal. La UCRI endilgaba a la oposición haber apoyado la política económica de Aramburu, mientras el radicalismo del pueblo señalaba que la liquidación de DiNIE daría “un golpe de muerte al proceso de industrialización”<sup>43</sup>.

Pese a estas diferencias, el dictamen de la mayoría fue votado por la unanimidad. En él se sostenía que el parlamento “vería con agrado” la suspensión de los remates y el inicio de negociaciones con Bonn; en el caso de no lograr un nuevo acuerdo se reclamaba que el gobierno comprara las empresas o que en su defecto alentara la formación de cooperativas de empleados y obreros a fin de adquirirlas<sup>44</sup>.

El voto unánime de la Cámara de Diputados ponía en relieve la resistencia generada por la política oficial destinada a cumplir con el Acuerdo de Bonn y liquidar las ex empresas alemanas. Pero sobre todo revelaba la intención de la UCRI de no aparecer ante la opinión pública como despreocupada ante el futuro de los trabajadores del estado. Esta preocupación se dejó entrever al plantarse nuevamente la cuestión en el parlamento. Así, el

---

<sup>41</sup> *DSCDN*, 1958, Vol. 1, (pág. 650). El Partido Socialista y del Partido Comunista también expresaron su deseo de que se suspendieran los remates. En cambio, los partidos Demócrata, Demócrata Progresista y Cívico Independiente de Alsogaray consideraron conveniente respetar el Acuerdo de Bonn.

<sup>42</sup> *Clarín*, 12 de junio de 1958, (pág. 10).

<sup>43</sup> *DSCDN*, 1958, Vol. 2, (págs. 1127 – 1185).

<sup>44</sup> *DSCDN*, 1958, Vol. 2, (pág. 1196).

25 de junio, dos días después del primer remate, la Cámara trató un nuevo pedido de informes. Esta vez el bloque ucrista adoptó la postura del Ejecutivo; Horacio Gómez Machado sostuvo que sólo mediante el respeto a los acuerdos internacionales se lograría atraer el capital extranjero. Por lo demás, la privatización no significaría la destrucción de las empresas. Inclusive, algunas podrían ser adquiridas por sus trabajadores<sup>45</sup>.

A pesar de que la bancada oficialista se había alineado con la postura del presidente Frondizi, ello no fue obstáculo para que la sesión culminara con la votación de otro pedido de informes en el cual se preguntaba al gobierno si el problema de los empleados y obreros podía ser resuelto “no obstante el remate de las empresas”<sup>46</sup>. A partir de entonces, el súbito y dramático interés de los partidos por DiNIE quedaría sepultado definitivamente. Ello no se debía solamente a que nuevas y polémicas cuestiones demandaban el tratamiento de la Cámara, sino principalmente a que el inicio de los remates oficiales disminuyó la importancia del tema en la lucha interpartidaria.

### 3.1. Los remates de 1958

El Acuerdo de Bonn había establecido que las empresas estatales serían rematadas como “empresas en marcha”; es decir, con todos los activos y pasivos existentes en el momento del remate, además del personal con los derechos que acordaba la legislación laboral y de previsión social. Adicionalmente, los ex propietarios alemanes fueron autorizados a presentar una primera oferta de compra, que sería considerada como el precio base del remate. En los casos en que no se presentaran ofertas o bien éstas fueran inferiores al 70 % del patrimonio de las empresas públicas, la propia comisión fijaría la base. Esto fue lo que

---

<sup>45</sup> *DSCDN*, 1958, Vol. 2, (pág. 1310-1313).

<sup>46</sup> *DSCDN*, 1958, Vol. 2, (pág. 1320).

sucedió en los casos de Osram, Bayer y Behring<sup>47</sup>. Además se estableció que si en el primer remate no se recibían ofertas de compra, las fábricas saldrían a la venta con una base 25 % menor a los 180 días, y sin base a partir de entonces. Luego de los primeros remates circularon rumores de que las empresas alemanas especulaban con la posibilidad de que al no presentarse oferentes, se obtendrían grandes reducciones en el precio final de compra<sup>48</sup>.

En realidad, había otros factores que influían en el interés de las casas matrices alemanas. A principios de junio, un semanario económico informó que no existía un gran interés por parte del capital extranjero, aunque reconoció que representantes de las compañías alemanas Merck, Shering y Behring asistirían al remate. Si bien se conjeturaba que el estado de las empresas no era bueno, las restricciones existentes para la importación de productos finales podían alentar a las casas matrices alemanas a recuperar sus filiales<sup>49</sup>.

La adquisición de las primeras empresas por Merck, Shering, Química Hoescht y Osram fue seguida de anuncios de nuevos aportes de capital, renovación tecnológica e integración local de la producción, que según los nuevos dueños sólo alcanzaba un veinticinco por ciento<sup>50</sup>. También readquirieron sus filiales las empresas Miag (Fábrica Argentina de Instalaciones Industriales), Bayer de Leverkusen (Monopol) y Gunther Wagner de Hannover (Gunther Wagner SRL).

En otros casos, el capital alemán no mostró interés en readquirir sus filiales. De hecho, a finales de los años cincuenta, varias empresas ya habían reingresado al mercado argentino a través de otras firmas. Este fue el caso de la Bayer Berlín A.G. que, a finales de los años cuarenta, se vinculó con Proindar S.A. Inicialmente, esta empresa representó

---

<sup>47</sup> El precio base representó en todos los casos una significativa revaluación del patrimonio de las empresas. El patrimonio neto anterior figura en “Mensaje del Poder Ejecutivo remitiendo informes solicitados por la H. Cámara de Diputados sobre aspectos vinculados con empresas DiNIE” en Archivo Parlamentario.

<sup>48</sup> *La Prensa*, 16 de julio de 1958, (pág. 5).

<sup>49</sup> *Economic Survey*, 3 de junio de 1958, (pág. 5).

<sup>50</sup> *Clarín*, 26 de junio de 1958, (pág. 8) y 2 de septiembre de 1958, (pág. 19).

comercialmente a la Bayer, para ser luego adquirida por la alemana. Algo similar ocurrió con Siemens Schuckert, Thyseen, Deutz Otto y Robert Bosch, entre otras. Dado que las patentes y marcas en poder de la DiNIE habían sido devueltas antes de la venta de sus empresas, no hubo interés del capital alemán por adquirirlas.

En total, siete empresas fueron recuperadas por sus ex propietarios. Otras cinco fueron compradas por capitales argentinos, una de ellas por el empresario y ex vicepresidente de la DiNIE Raymundo López<sup>51</sup>. Pero, la gran mayoría fue readquirida por la propia DiNIE. Este proceso comenzó poco después de iniciarse los primeros remates y adquirió mayor intensidad en los meses finales del año cuando se subastaron, a precios base inferiores en un veinticinco por ciento, las empresas que no habían recibido inicialmente ninguna oferta.

El cambio de la política oficial respondía a las presiones recibidas de la propia UCRI. De hecho, el anuncio de esta política fue realizado por el secretario de Industria Alberto Tedín en una entrevista pública con el diputado José Liceaga, quien encabezaba la resistencia contra el remate de las empresas al interior del partido oficial. Entonces, Tedín informó que se formaría “un conjunto armónico y racional de industrias” con el fin de “promover las actividades que dieron lugar a la creación del ente”<sup>52</sup>.

A mediados de agosto el estado adquirió Electrodinie, Crisoldinie, Ferrodinie y Metaldinie. Pero, la compra más significativa, por las empresas involucradas y el procedimiento, tuvo lugar dos meses más tarde cuando el ente estatal compitió y se impuso frente a otros oferentes para adquirir La Química Bayer, Anildinie y Perfumerías Tosca. Un

---

<sup>51</sup> En un caso, el de Beiesford E.N., la empresa compradora Raylop S.R.L., la revendió a Química Hoescht a sólo 15 días de haberla adquirido.

<sup>52</sup> *Clarín*, 29 de julio de 1958, (pág. 16).

funcionario del grupo sostuvo que la operación tenía como fin asegurar la plena ocupación en las empresas y “la defensa del patrimonio nacional”<sup>53</sup>.

Según el semanario liberal *Economic Survey* el episodio revelaba la indisposición oficial a atacar el problema del déficit fiscal. Más importante aún, la nacionalización no respondía a criterio alguno de política industrial; La Química Bayer había sido despojada de las marcas y patentes con lo que su valor era relativo, Anildinie importaba productos finales y la empresa restante sólo elaboraba perfumes y aguas de colonia<sup>54</sup>. En suma, ninguna de ellas constituía una industria prioritaria para el desarrollo industrial.

En contraste con la promesa gubernamental en el sentido de que las empresas podrían ser adquiridas por los propios trabajadores, ninguna fue adjudicada a una cooperativa obrera. En realidad, sólo los trabajadores de Osram conformaron una cooperativa y compitieron con la casa matriz alemana en el remate, pero no lograron contar con el apoyo del gobierno que, al parecer, había ofrecido la asistencia de la banca oficial. Como resultado de ello, la empresa volvió a manos del capital extranjero<sup>55</sup>.

El cuadro 2 reúne la información sobre los remates. En conjunto, fueron adquiridas 29 empresas por un total de 931 millones de pesos, lo que representaba un 91 % del precio base de remate establecido por la Comisión del decreto ley 15.365/57. Aunque no poseemos los datos sobre el patrimonio de todas las empresas, la información disponible sobre 20 firmas nos indica que el precio de compra representaba sólo un 65,5 % del patrimonio. Los compradores no sólo se beneficiaron de los bajos precios de adquisición.

---

<sup>53</sup> *Clarín*, 16 de octubre de 1958, (pág. 23).

<sup>54</sup> *Economic Survey*, 21 de octubre de 1958, (pág. 12).

<sup>55</sup> Sobre el episodio de la cooperativa obrera Osram y sus denuncias contra el gobierno, véase *La Prensa*, 18 de julio de 1958, (pág. 3). Paradójicamente, los delegados gremiales de La Química Bayer E.N., que se habían expresado a favor de la readquisición de la empresa por la casa matriz, asistieron a la reabsorción de la planta por el estado. Véase, *La Prensa*, 26 de junio de 1958, (pág. 5).

También se vieron favorecidos el establecimiento de un régimen de pagos flexible mediante cuotas anuales que iban desde un período de 3 hasta un máximo de 10 años.

A finales de 1958, la Comisión dio por cumplida su tarea, aunque todavía quedaba arribar a un arreglo sobre la distribución que correspondía del monto total de las subastas al estado argentino y a la parte alemana. El Acuerdo de Bonn había dispuesto que una comisión mixta de peritos fuera la encargada de esta tarea, pero poco después de iniciados los remates trascendió que habían surgido diferencias importantes entre las partes<sup>56</sup>. Aunque el acuerdo había previsto que en esa eventualidad ambos gobiernos recurrirían a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Frondizi accedió a iniciar conversaciones directas con el fin de acelerar el proceso. Finalmente se arribó a un acuerdo por medio del cual se fijaron los valores alemanes y argentinos en las empresas en un porcentaje del 49 % y 51 % respectivamente. Dado que el estado argentino se había hecho cargo de las empresas en 1947, cuando la mayoría de ellas presentaban fuertes quebrantos que amenazaban su existencia, el acuerdo era altamente beneficioso para los alemanes. Poco después, trascendió que el arreglo significaba una fuerte concesión de la Argentina ya que estimaciones previas habían fijado el valor aportado a las empresas por el estado argentino en un 74 % del total. En definitiva, la Argentina cedía poco más de 200 millones de pesos<sup>57</sup>.

¿Por qué el gobierno accedía a tamaña concesión? Para Frondizi era imprescindible solucionar este diferendo con Alemania Federal, ya que se estimaba que sólo así las empresas de ese país invertirían en la Argentina. El arreglo de la propiedad alemana se sumaba a otras medidas tomadas por el gobierno que resolvían viejos pleitos, visualizados por Frondizi como obstáculos a la inversión extranjera; de esta forma entre mayo de 1958 y

---

<sup>56</sup> *La Prensa*, 24 de junio de 1958, (pág. 5).

<sup>57</sup> *Economic Survey*, 3 de febrero de 1959, (pág. 61).

marzo de 1959 se devolvió la empresa Mercedes Benz a la Daimler, se firmaron acuerdos con la Compañía Argentina de Electricidad y con la American and Foering Power Co. sobre el vencimiento de concesiones y la expropiación de las usinas de la ANSEC respectivamente, y se restituyó a los accionistas (muchos de ellos franceses) los cuantiosos bienes del grupo Bemberg<sup>58</sup>. En todos los casos, incluso allí donde mediaba un fallo judicial a favor de los empresarios, la buena voluntad oficial se expresaba en la renuncia de legítimos derechos por el orden de varios miles de millones de pesos.

#### 4. La política económica ortodoxa y el final de una experiencia, 1959-1962:

La primacía otorgada por Frondizi al capital extranjero y la simétrica desconfianza frente a las capacidades del estado condenaron de antemano todo intento de racionalización y reorganización de DiNIE. A estos factores se sumó, a partir de junio de 1959, la presencia en el Ministerio de Economía de partidarios del liberalismo económico para quienes los mediocres resultados del estatismo peronista constituían una ratificación fehaciente de sus principios. Basados en esa experiencia, pero también en la fe inquebrantable de sus principios, los nuevos hacedores de la política económica consideraban que la presencia del estado debía ser reducida al mínimo.

Es en este contexto donde deben analizarse los años finales de la DiNIE. Durante el primer año de la administración Frondizi, el directorio comenzó a elaborar un plan de reorganización del ente. Según se ha visto, DiNIE se convirtió en el principal comprador en los remates, al adquirir un total de 17 empresas. Poco después, el directorio nombró una comisión que debía tomar contacto con empresas extranjeras con el objetivo de concertar

---

<sup>58</sup> Sobre la administración de las empresas Bemberg durante el peronismo véase mi “Monopolios, poder y política. Perón contra el grupo Bemberg, 1948-1959” presentado en el Seminario “Problemas de la Historia Argentina Contemporánea”, UBACYT F061, PEHESA- Instituto Ravnani, marzo de 2006.

acuerdos de asistencia técnica y licencias, así como explorar la posibilidad de firmar convenios de asociación. La comisión visitó empresas metalúrgicas y eléctricas de Italia, Alemania Federal e Inglaterra. A su término, se iniciaron conversaciones con la Maschinenfabrik Ausburg Nuremberg A.G. (MAN) que culminarían en su incorporación a la firma estatal Talleres Argentinos de Motores Diesel (TAMDEN)<sup>59</sup>.

Además, el directorio comenzó a estudiar un conjunto de propuestas de reestructuración y racionalización del ente como la fusión de empresas de reducida y similar producción, la reducción del número de sus sucursales en el interior y la venta de activos en desuso. Pero los proyectos más importantes consistían en la liquidación o venta de las empresas comerciales y de todas aquellas que siendo fabriles no encuadraban dentro de los criterios oficiales de promoción industrial, y la constitución de empresas mixtas mediante el aporte de capital privado, al que se le otorgaría el control administrativo y técnico<sup>60</sup>.

El 15 de julio de 1959, el directorio elevó el plan de acción al Poder Ejecutivo. Por medio de él, se proponía una amplia reorganización del grupo y la privatización de la mitad de sus empresas. Este curso de acción era justificado por la delicada situación financiera del grupo y la imposibilidad de demandar nuevos recursos al gobierno federal, inclusive el pago de las cuantiosas deudas que diversos organismos habían contraído con DiNIE. La privatización se ofrecía así como el mejor medio para reequipar y modernizar las empresas que el directorio consideraba de interés:

“Ante la imposibilidad financiera de equipar debidamente a la totalidad, la supervivencia de muchas de las Empresas DiNIE no haría más que sofocar a aquellas otras cuyo desarrollo realmente interesa y requiere el aporte de la técnica moderna en forma de costosas instalaciones complementarias”<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> DiNIE, *Memoria y Balance. XII Ejercicio Año 1958*, Bs. As., 1959, (págs. 8-9).

<sup>60</sup> Ídem, (págs. 35-36).

<sup>61</sup> Ídem, (pág. 23).



La privatización requeriría de una amplia campaña de esclarecimiento a fin de evitar que se convirtiera en motivo de nuevas disputas políticas:

“Es menester que la opinión pública se imponga de que al racionalizar a DiNIE el Gobierno Nacional no se propone liquidarla (...) urge convertirla en el organismo capaz de secundar la acción de un gobierno progresista que busca la prosperidad a través de la libre competencia”<sup>62</sup>.

Además, este plan demandaría el compromiso oficial de que los recursos alcanzados serían destinados a DiNIE y no derivados al Tesoro. Al mismo tiempo, la posibilidad de organizar sociedades mixtas exigiría arduas negociaciones con los posibles socios y el rechazo al sistema de venta por licitación. Éste último mecanismo era inconveniente ya que no siempre garantizaría la incorporación de un socio capaz de aportar y perfeccionar constantemente la tecnología<sup>63</sup>

El plan de acción incluyó también una decisión sobre las empresas que serían mantenidas por el grupo y aquellas que debían ser enajenadas parcial o totalmente. Entre las primeras se encontraban la Destilería de Alcohol Anhidro, concebida como un instrumento esencial para intervenir en el mercado de alcoholes dominado por unas pocas grandes empresas, y Petroquímica, empresa que era propietaria de la única destilería y fábrica de cemento de la Patagonia. A ellas se sumarían la Distribuidora de Frutas Argentinas (DFA), que serviría para la promoción de las exportaciones frutícolas del Alto Valle del Río Negro; el Laboratorio Fortius (ex La Química Bayer); y las tres empresas textiles.

De las empresas metalúrgicas, Ferrodinie, Motordinie, Metaldinie y Crisoldinie debían permanecer en la órbita estatal, aunque se buscaría formar con las tres primeras sociedades anónimas con la participación de capitales privados, como ya se había logrado con la TAMDEN, una planta que había permanecido inactiva durante años a la espera de la

---

<sup>62</sup> Ídem, (pág. 26).

<sup>63</sup> Ídem, (pág. 28).

integración completa de las maquinarias. En cambio, INAG, IMPA y Arbizu y Cerviño debían ser privatizadas

Por último, el directorio recomendaba liquidar las empresas constructoras y las plantas químicas farmacéuticas de PAEN (ex Perfumerías Tosca), Anildinie, Fábrica Argentina de Pinturas y la Fábrica Argentina de Productos Químicos. Todas ellas, con excepción de la última, habían sido adquiridas pocos meses antes en las licitaciones oficiales<sup>64</sup>.

En total, siete empresas permanecerían en la órbita estatal (Petroquímica, Distribuidora de Frutas Argentinas, Destilería de Alcohol Anhidro, Laboratorio Fortius y las tres plantas textiles), seis serían privatizadas total o parcialmente (Ferrodinie, Metaldinie, Motordinie, INAG, IMPA y Arbizu y Cerviño); y diez serían liquidadas (PAEN, Anildinie, Fábrica Argentina de Pinturas, Fábrica Argentina de Productos Químicos, FADAE, Fábrica Argentina de Productos Electroquímicos, y las cuatro empresas constructoras).

El plan de reorganización fue elevado al gobierno en un momento en que la política oficial hacia las empresas públicas tomaba un cariz liberal, con la designación de Álvaro Alsogaray como ministro de Economía. Para Alsogaray el principal problema económico de la Argentina residía en la intervención del estado que asfixiaba la iniciativa privada, y el incremento de la inflación originado principalmente en el fuerte déficit fiscal. Contra ambos males, Alsogaray proponía la aplicación de una política de estabilización ortodoxa.

En este contexto, el nuevo secretario de Industria Carlos Juni aceptó de buen grado las propuestas del directorio de DiNIE, afirmando que el organismo debía dejar de ser una carga para el erario público, algo que no era cierto<sup>65</sup>. El 14 de agosto, aprobó el contrato que DiNIE y TAMDEN había firmado a fines de abril con MAN A.G.. Por su intermedio,

---

<sup>64</sup> Ídem, (págs. 26-28).

<sup>65</sup> Si bien varias empresas era deficitarias, especialmente las constructoras, el balance general que agrupaba los resultados de las empresas y del organismo central no arrojó pérdidas hasta 1961.

se constituía la firma Industrias Argentinas MAN S.A., con un capital inicial de 300 millones de pesos, para la fabricación de maquinarias, motores diesel y sus repuestos. DiNIE aportaba instalaciones y maquinarias por una suma de 3,5 millones de marcos, en tanto que MAN A.G. contribuía con equipos, matrices, planos y métodos de fabricación por un valor de 4,7 millones de marcos. Ambos socios aceptaban un complejo sistema de aportes y capitalización cuyo fin era equilibrar en partes iguales el capital de la firma. En forma adicional, el contrato estipulaba que el capital circulante se obtendría de créditos bancarios o bien de la suscripción de acciones, que se haría en partes iguales. A pesar de que ambos socios tendrían una participación igualitaria en el capital de la empresa, la dirección estaría a cargo de los alemanes, quienes nombrarían a cuatro de los siete directores. Por su parte, los alemanes se comprometían a ceder durante cinco años sus patentes libres de regalías así como entrenar al personal argentino. En contraprestación, se aseguraban que la empresa sólo importaría maquinarias desde Alemania Federal<sup>66</sup>. Industrias MAN S.A. se hizo cargo de la planta de motores diesel de TAMDEN en septiembre de 1960. Pocos meses antes, el gobierno instrumentó un régimen de promoción para la industria del motor diesel y enfrentó la oposición de algunas empresas industriales frente al ingreso de MAN A.G. al mercado argentino<sup>67</sup>.

A finales de ese año DiNIE logró constituir otra sociedad mixta. Se trataba de la Distribuidora de Frutas Argentinas (DFA), una firma fundada en 1930 por las compañías ferroviarias inglesas a fin de incrementar la utilización de la capacidad de carga. La DFA era propietaria de una fábrica de extracto de tomate, plantas de empaque de frutas frescas y de enlatado de diversos productos en Mendoza, San Juan y Río Negro, así como un

---

<sup>66</sup> BCCAA, n° 82-83, julio septiembre de 1959, (pág. 216).

<sup>67</sup> *Economic Survey*, 12 de julio de 1960, (págs. 409-410).

moderno frigorífico instalado en 1948 y destinado a la conservación de la cosecha frutícola del Alto Valle.

El caso es importante en tanto el directorio de DiNIE había considerado que la DFA podía jugar un papel central en el incremento de las exportaciones frutícolas. La privatización parcial de la empresa se enmarcó en una fuerte polémica. Aunque diversas cooperativas de productores habían presentado propuestas para hacerse cargo de la empresa desde 1956, DiNIE se decidió por la de la Corporación Frutera Patagónica S.A., una firma en formación que se suponía vinculada a comerciantes ajenos al negocio frutícola. El 1 de diciembre de 1960 quedó organizada la Distribuidora de Frutas Argentinas S.A. con un capital autorizado de 50 millones de pesos, del que inicialmente quedó integrado unos diez millones; DiNIE suscribió 50.000 acciones con derecho a nombrar tres directivos, incluido el presidente, en tanto que la Corporación suscribió otras 50.000 acciones con derecho a designar cuatro directivos, incluido el director gerente<sup>68</sup>.

La difusión de los detalles del acuerdo generó mayor irritación ya que se entendía que era desventajoso con respecto a las propuestas previas de las cooperativas de productores<sup>69</sup>. Pero las discusiones se reanudaron cuando se conocieron detalles sobre las maniobras realizadas por la Corporación en contra de los productores<sup>70</sup>.

Fuera de los casos de TAMDEN y la DFA, no se organizaron otras sociedades mixtas. A la vez, DiNIE tampoco pudo impulsar a las que permanecieron en su seno. En gran medida porque sus propuestas no contaban con el apoyo oficial. Para el directorio era claro que bajo la política de corrección del déficit fiscal propiciada por Alsogaray “no habría de contarse con la colaboración financiera del Estado, ni siquiera en lo relativo a una

---

<sup>68</sup> Véase los estatutos en *Boletín Oficial de la República Argentina*, 23 de enero de 1962, Segunda Sección.

<sup>69</sup> *Economic Survey*, 6 de diciembre de 1960, (pág. 775), y 20 de diciembre de 1960, (pág. 821).

<sup>70</sup> *Economic Survey*, 7 de marzo de 1961, (pág. 116).

cancelación sustancial, o por lo menos importante, de los débitos que sus distintas reparticiones mantienen pendientes con DiNIE o sus empresas”<sup>71</sup>. Por ello, más allá de la privatización parcial o total de las empresas, el directorio estaba con las manos atadas.

En efecto, el organismo no podía contar con nuevos aportes del Estado destinados a la inversión y modernización de sus plantas. A la vez, DiNIE se vio afectada por la política oficial de constricción crediticia hacia las empresas públicas. De esta forma, según se observa en el cuadro 3, la participación del crédito bancario en las deudas del organismo se redujo del 40 % en 1958 al 24 % en 1960. La situación financiera del grupo se hizo más difícil debido a los grandes compromisos que diversos organismos del estado mantenían con DiNIE, que alcanzaron en 1960 al 55 % de los créditos del ente<sup>72</sup>.

Bajo la doble compresión de la falta de aportes del Estado nacional y el creciente endeudamiento que sus dependencias asumían con las empresas DiNIE, éstas se vieron obligadas a descontar certificados por trabajos realizados y a acrecentar sus incumplimientos con las Cajas de Jubilación o con el fisco. En estas circunstancias, la actividad del directorio se concentró en las tareas racionalización del personal y liquidación de las firmas cuya situación se consideraba irreversible, postergando indefinidamente el plan de reactivación de las empresas<sup>73</sup>.

La etapa final del organismo se inició en abril de 1961 cuando Frondizi reemplazó a Alsogaray por Roberto Alemann, un economista liberal con fuertes vínculos en la comunidad empresaria. El nuevo ministro designó como secretario de Industria al presidente de la Unión Industrial Argentina José Antonio Blanco. El recambio significó el

---

<sup>71</sup> DiNIE, *Memoria y Balance. XII Ejercicio. Año 1959*, Bs. As., 1960, (págs. 9-10).

<sup>72</sup> El pasivo pasó de representar el 49 % del activo total en 1955 al 63% en 1960.

<sup>73</sup> DiNIE, *Memoria y Balance. XIII Ejercicio. Año 1960*, Bs. As., 1961, (pág. 13).

inicio de la liquidación del ente y la privatización de las empresas, en el marco de una nueva ofensiva con el fin de disminuir el déficit de las empresas públicas<sup>74</sup>.

En mayo, al tiempo que el presidente iniciaba la “batalla del transporte”, el secretario de Industria anunciaba la venta de Anildinie, la Destilería de Alcohol Anhidro y FAPEN. Todas ellas estaban semiparalizadas y sus balances arrojaban pérdidas de consideración<sup>75</sup>. Con el fin de darle al proceso un carácter expeditivo, el gobierno nombraba un interventor en cada empresa quien en un plazo perentorio debía formalizar un inventario de sus bienes y de su activo y pasivo. Además, el interventor debía tomar las medidas de racionalización necesarias para facilitar la privatización. La venta se realizaría por medio de un remate público al mejor postor, ofreciéndose como “empresa en marcha” o bien en lotes, y se otorgarían facilidades de pago para los compradores<sup>76</sup>.

Un mes más tarde, el gobierno dio el paso definitivo decretando la liquidación de la DiNIE y de su empresa financiera CIFEN. Para ello, la sometió a un régimen similar mediante el nombramiento de un interventor, al que le concedía un plazo de un año para la realización de sus bienes<sup>77</sup>. Finalmente, en junio se publicaron los decretos que disponían la privatización del conjunto de las empresas en un plazo no mayor a los 240 días.

Al mes siguiente tuvo lugar la primera privatización, que fue acompañada de nuevas acusaciones de malversación de bienes públicos. Se trataba de la venta de FANDET, de la Fábrica Argentina de Envases Textiles y de la Corporación Argentina de la Tejeduría

---

<sup>74</sup> Esta ofensiva incluyó la privatización de DiNIE y de Transportes de Buenos Aires, entre las empresas más importantes. A la vez, el gobierno inició un plan de racionalización ferroviaria con la eliminación de servicios, el despido de trabajadores y la modernización de sus equipos.

<sup>75</sup> *The Review of the River Plate*, May 23, 1961, (pág. 20).

<sup>76</sup> El marco legal también estableció que la remuneración del interventor y sus colaboradores dependerían del cumplimiento de los plazos fijados. Así, el 40 % se pagaría si la operación era realizada en los plazos fijados y el 60 % restante una vez aprobada la operación. Véase, decretos 3.800, 3.801 y 3.802/61 en *A.L.A.*, 1961, (págs. 345-548). Los plazos para la venta de las empresas eran 240, 100 y 180 días respectivamente.

<sup>77</sup> Decreto 4.786 del 15 de junio de 1961 en *A.L.A.*, 1961, (pág. 668-669).

Doméstica. En contraste con las normas establecidas, las empresas textiles serían adquiridas en forma directa por la Unión de Cooperativas Agrícolas Algodoneras (UCAL) de Chaco por un monto total de 260 millones de pesos. El contrato establecía que la UCAL abonaría, al momento de tomar posesión de las fábricas, el 10 % del importe mientras que el 90 % restante sería abonado en 10 cuotas anuales a un interés anual de sólo el 5 %<sup>78</sup>.

La operación desató una fuerte polémica. *Economic Survey* la criticó al considerar que tanto el precio como las condiciones de pago eran “irrisorios”. El semanario calculaba que el valor total los bienes, que incluían 25.000 husos instalados y una moderna desmotadora, oscilaba entre los 450 y 500 millones de pesos; es decir el doble del precio de venta oficial. Teniendo en cuenta el precio extremadamente bajo de venta y las ventajosas condiciones de pago, la revista sostenía que la UCAL lograría saldar la deuda por medio de las ganancias de las empresas, que en 1959 habían totalizado 70 millones<sup>79</sup>. Para *Economic Survey* la venta sólo encontraba explicación en las dificultades políticas de la UCRI chaqueña:

“Las circunstancias que rodean a este asunto, donde el gobernador (Ángel) Duca ha cursado telegramas de felicitaciones a la UCAL, y la UCAL ha hecho lo mismo con el gobernador y el presidente de la Nación, demuestra claramente que la operación en sí es obra de politiquería, que no ha reparado en el despilfarro de los bienes públicos”<sup>80</sup>.

Pese a estos problemas, el gobierno nacional ratificó su política ya que consideraba que la venta directa de las empresas era el más apto para una rápida privatización. Con ese fin se introdujeron modificaciones en los decretos que disponían la venta de la Destilería, Anildinie y FAPEN y se dispuso acelerar los trámites para vender el resto de las empresas<sup>81</sup>. Finalmente, en septiembre, se inició la publicación de anuncios en los

<sup>78</sup> Véase el decreto 6077 y el boleto de compraventa en *A.L.A.*, 1961, (págs. 718-720).

<sup>79</sup> *Economic Survey*, 30 de mayo de 1961, (págs. 301-302).

<sup>80</sup> *Economic Survey*, 1 de agosto de 1961, (pág. 454).

<sup>81</sup> *La Nación*, 13 de septiembre de 1961, (pág. 8).

principales diarios del país mediante los cuales se informaba el estado patrimonial de las empresas y la recepción de propuestas para su adquisición hasta el último día de ese mes.

Las normas de privatización otorgaban grandes atribuciones a los interventores quienes debían recibir propuestas del capital privado y recomendar a la Secretaría de Industria aquella que consideraban más conveniente<sup>82</sup>. Además, el plazo extremadamente corto para la presentación de propuestas de adquisición limitaba la participación de oferentes en tanto impedían un estudio minucioso del estado productivo y financiero de las empresas, su adecuación a las necesidades de los potenciales compradores, y la posibilidad de formalizar operaciones destinadas a financiar las adquisiciones<sup>83</sup>.

El análisis del proceso de selección se ve dificultado por el hecho de que no contamos con el detalle de las propuestas presentadas. Pero, al menos sabemos que en varios casos se presentaron más de una oferta. Así, Anildinie recibió 5; FADAE 2; Metaldinie 2; Laboratorio Fortius 5; Destilería de Alcohol Anhidro 4; IAE 3; Hormical 5; FAPEN 7; IMPA 5; Ferrodinie 4<sup>84</sup>. Este interés estaba basado, en gran medida, en las amplias facilidades de pago que el gobierno estaba dispuesto a otorgar.

En los siguientes noventa días se llegaron a acuerdos para la privatización de quince empresas del grupo DiNIE. Como puede observarse en el cuadro 4, siete firmas fueron adquiridas por su propio personal a través de la formación de sociedades anónimas. Esta solución era alentada por el gobierno en tanto le permitía desprenderse de las fábricas y, a la vez, mostrarse ante la opinión pública como proclive a la adopción de sistemas

---

<sup>82</sup> *Clarín*, 29 de septiembre de 1961, (pág. 41).

<sup>83</sup> Véase la declaración de la Cámara de Empresas Petrolíferas Argentinas en *La Razón*, 22 de septiembre de 1961, (pág. 7).

<sup>84</sup> Sólo Copen, Geope y Motordinie recibieron una propuesta. *La Nación*, 7 de octubre de 1961, (pág. 3).



progresistas por medio de los cuales los trabajadores se convertirían en empresarios<sup>85</sup>. Otras seis firmas fueron compradas por pequeñas y medianas empresas nacionales. Sólo Ferrodinie fue adquirida una empresa de mayor peso como la metalúrgica RyCSA.

Las firmas compradoras se hacían cargo del activo y del pasivo de las empresas públicas. Por su parte, el estado otorgó amplias facilidades de pago a los compradores; con excepción de un caso, entre el ochenta y noventa por ciento del monto de adquisición sería abonado en cuotas anuales o semestrales a largo plazo y con un interés de sólo el 7% anual. Estas facilidades no sólo eran acordadas a las empresas adquiridas por sus trabajadores sino también, aunque en forma más atenuada, a firmas privadas.

Pese al éxito con que el gobierno logró desprenderse de la mayor parte de las empresas en el término de noventa días, la privatización de las tres más grandes fracasó: Laboratorios Fortius, la Destilería de Alcohol Anhidro y Petroquímica<sup>86</sup>. La primera estaba paralizada como consecuencia de la devolución de las marcas y patentes a la Bayer A.G. a fines de 1958. Aunque la empresa era propietaria de equipos y cuantiosas instalaciones, su actividad se reducía a la realización de trabajos para terceros. La escasa utilización de sus activos originaba fuertes quebrantos. En enero de 1962, el interventor logró la venta directa de la planta principal y sus maquinarias a la Municipalidad de Buenos Aires con el propósito aparente de reactivar el laboratorio, pero los bienes restantes permanecieron en manos de DiNIE<sup>87</sup>. A fines del año siguiente, un nuevo intento de privatización fracasó en medio de una puja entre compradores e impugnaciones del Tribunal de Cuentas de la Nación debido

---

<sup>85</sup> La UIA apoyó esta política solicitando que, a igual valor, se diera prioridad a las propuestas de capital argentino y especialmente obrero. *El Cronista Comercial*, 25 de octubre de 1961, (pág. 3).

<sup>86</sup> "Memorando para conocimiento del Sr. Subsecretario de Industria y Minería de la Nación", 5 de abril de 1962, Expediente 30.905/62. Archivo de la Secretaría de Industria (ASI). Archivo General de la Nación (AGN). Caja 15.

<sup>87</sup> Expediente 30.187/62. ASI. AGN. Caja 12.

a la baja valuación y la infracción a normas legales esenciales<sup>88</sup>. Sólo tiempo más tarde se logró vender los bienes restantes a una nueva empresa llamada Laboratorios Fortuna S.A.

La Destilería afrontaba una situación más difícil ya que desde comienzos de la década de 1960, la elaboración de alcoholes en base a cereales no podía competir en precio con los subproductos de la industria azucarera. Como consecuencia de ello, la empresa había paralizado su actividad en 1960. Y aunque obtuvo pequeños beneficios derivados del arrendamiento de los silos, el mantenimiento de las instalaciones generaba importantes quebrantos. En octubre de 1962 se alcanzó un acuerdo para la venta de la empresa a Luis de Ridder Ltda. S.A, pero en abril del año siguiente un decreto dejó sin efecto el convenio.

Un caso similar fue el de Petroquímica. En 1958, la empresa acusaba una creciente obsolescencia de sus bienes de capital, especialmente en relación con la explotación de petróleo. Petroquímica también refinaba petróleo, incluso extraído por YPF y Astra, y elaboraba cemento en una planta inaugurada en 1951. Esta diversificada actividad no había dado origen al desarrollo de capacidades gerenciales y empresariales mínimas. Debido a esta situación, sólo en el término del período 1960-1961, sus deudas se incrementaron un 90 %, mientras su situación financiera se deterioraba a grandes pasos<sup>89</sup>.

En enero de 1962, el gobierno otorgó a Corcemar la planta cementera, pero la administración de José María Guido dejó vencer el plazo de ratificación<sup>90</sup>. Al año siguiente, se convocó a una licitación pública internacional, al término de la cual la empresa fue adjudicada a la petrolera Pérez Companc S.A. Sin embargo, tras la asunción del presidente

---

<sup>88</sup> Tribunal de Cuentas de la Nación, *Memoria 1962*, Bs. As., 1963, (págs. 528-530).

<sup>89</sup> Ídem, (págs. 536-537).

<sup>90</sup> Resolución 199/62. Expediente 31.548/62. ASI. AGN. Caja 17.

Arturo Illia, el convenio fue derogado por implicar una violación a la ley 14.773, que consagraba como propiedad pública los yacimientos de hidrocarburos<sup>91</sup>.

Más interesante que el fracaso oficial en vender estas tres firmas, es observar que la evolución posterior de las empresas privatizadas mostró en general un desempeño negativo. Aunque las firmas fueron reintegradas a la actividad privada mediante contratos que suponían grandes ventajas para las sociedades compradoras, muchas de ellas organizadas por el personal empleado, su evolución posterior estuvo marcada por el deterioro progresivo de su situación financiera y su importancia económica. Como se observa en el cuadro 5, que recoge datos para sólo seis empresas, la facturación y personal empleado se redujo considerablemente para finales de la década de 1960. Además, la Cía Americana de Aceros y Motordinie habían abandonado sus líneas de fabricación.

El mediocre desempeño de estas firmas evidenciaba que las empresas estatales no estaban en condiciones de someterse a la competencia del mercado. En forma adicional, luego de su privatización no hubo serios esfuerzos para reorganizar las empresas ni fuertes inversiones destinadas a renovar sus instalaciones. Una excepción parece haber sido IMPA, una empresa que fabricaba bicicletas, laminaba aluminio y producía diversos tipos de envases plásticos y metálicos. A comienzos de la década de 1950, IMPA había llegado a emplear a 1.200 trabajadores entre obreros, empleados y técnicos. Poco antes de su privatización, la firma sufrió un severo programa de racionalización del personal y reestructuración productiva mediante la separación de la planta principal de Almagro de otras dos ubicadas en Quilmes y Ciudadela, y la suspensión de su línea de producción de bicicletas. Cuando a fines de 1961 la empresa fue transferida a la cooperativa, el número de obreros y empleados alcanzaba los 630. Concentrada en la laminación y fabricación de envases de aluminio,

---

<sup>91</sup> Decreto 343 del 31 de noviembre de 1963 en *A.L.A.*, 1963, (pág. 1955).

IMPA lograría en los años siguientes competir en el mercado interno y mantener en su cartera de clientes a grandes empresas nacionales y extranjeras<sup>92</sup>.

Pero este derrotero parece haber sido excepcional. Una conclusión similar puede deducirse si a las empresas mencionadas en el cuadro 5 se suman aquellas firmas que habiéndose privatizado en 1961 fueron devueltas a manos del estado debido al incumplimiento de los pagos acordados o bien por la quiebra de las compañías adquirentes. Este último caso fue el de Ferrodinie que había sido vendida a RyCSA, una firma que quebraría a mediados de los años sesenta, y también el de la empresa de capitales mixtos Distribuidora de Frutas Argentinas.

En conjunto, a comienzos de la década de 1970, el gobierno nacional se encontraba inmerso en causas judiciales para obtener la liquidación de las deudas o bien la reintegración de las plantas de Anildinie, Electrodinie, OHEN, GEOSA, Metaldinie y Laboratorios Fortuna<sup>93</sup>. En suma, el desempeño de las ex empresas DiNIE desmiente la versión según la cual la privatización del holding público fue un éxito.

Por otra parte, teniendo en cuenta las grandes facilidades otorgadas para la adquisición de las empresas y el posterior incumplimiento de muchos de los contratos de transferencia, parece claro que desde el punto de vista del erario público la venta del grupo DiNIE no constituyó un aporte significativo para la eliminación de su déficit<sup>94</sup>. En realidad, DiNIE no contribuía al déficit de las empresas estatales, que desde la perspectiva de los economistas liberales era el origen de los males económicos argentinos.

---

<sup>92</sup> DiNIE, *Memoria y Balance. XIII Ejercicio. Año 1960*, Bs. As., 1961, (pág. 16). La lista de clientes figura en expediente 32.194/68, ASI, AGN, Caja 34.

<sup>93</sup> Tribunal de Cuentas de la Nación, *Memoria 1971*, Bs. As., 1972, (págs. 115-116); y *Memoria 1972*, Bs. As., 1973, (pág. 95).

<sup>94</sup> Entre 1958 y 1963, el quebranto de las empresas de transporte representó el 94 % del total del déficit de las empresas públicas. CONADE, *Fuentes y usos de fondos de empresas públicas*, Bs. As., 1965, (pág. 116).

## 5. Epílogo:

El derrotero posterior de DiNIE fue largo y tortuoso. Tres años después de haberse iniciado el proceso de liquidación, el presidente Illia dio marcha atrás, dejando sin efecto el decreto que disponía su liquidación. Bajo el argumento de que todavía subsistían empresas industriales que se veían perjudicadas por la liquidación del organismo central, se restableció a este último<sup>95</sup>. Pero poco después del golpe militar de 1966 se dispuso la liquidación definitiva de sus bienes, por medio de licitaciones públicas, y el traspaso de las acciones de empresas públicas o privadas que estuvieran en su poder<sup>96</sup>. En los siguientes cuarenta meses, se fue produciendo la privatización de las empresas restantes<sup>97</sup>.

La historia del grupo DiNIE ilustra las tensiones económicas surgidas durante la década siguiente a la caída de Perón. Por un lado, desde el punto de vista de los economistas de la CEPAL y de los ideólogos desarrollistas, existía un fuerte consenso en la necesidad de reestructurar el papel del estado en la industrialización, orientando el esfuerzo hacia el desarrollo de las manufacturas que permitieran sustituir importaciones de maquinarias e insumos básicos como acero, productos químicos y petroquímicos para la industria liviana. Por otro lado, los sucesivos ministros de economía de los gobiernos de Aramburu y de Frondizi, alentaban una estrategia que colocaba a la reducción del déficit fiscal en el centro de los objetivos de la política económica.

---

<sup>95</sup> Decreto 5527 del 15 de mayo de 1964 en *A.L.A.*. 1964, (págs. 1435-1436).

<sup>96</sup> Decreto 1232 del 30 de agosto de 1966 en *A.L.A.*. 1966, (pág. 894).

<sup>97</sup> En 1966, CIFEN fue transferida a la Junta Nacional del Azúcar; Ferrodinie fue vendida a Gurmendi SA en 1970; y, al año siguiente, el frigorífico de la DFA fue adquirido por la Corporación de Productores de Frutas. El fracaso de sucesivos intentos de venta de Petroquímica condujo en 1973 a la constitución de una empresa mixta entre el estado federal y la provincia de Chubut. La firma sería privatizada en 1980. Por último, DiNIE era propietaria de acciones de la Compañía Metalúrgica Austral y de Industrias MAN, que fueron transferidas a la Petroquímica y a la Secretaría de Hacienda respectivamente.

Atrapada entre estas dos perspectivas, que en ocasiones eran presentadas por un mismo actor, las empresas DiNIE se vieron sometidas a fuertes constricciones económicas que deterioraron su patrimonio. Más importante aún, el predominio de una estrategia económica caracterizada por el progresivo abandono de las prácticas intervencionistas que el peronismo había acentuado, colocó al grupo en una situación de incertidumbre frente a su futuro. En un primer momento, el gobierno de Aramburu logró incorporar al país al sistema multilateral, en gran medida mediante una generosa concesión al gobierno y las empresas alemanas. Más tarde, bajo la presidencia de Frondizi, se ratificó el convenio de Bonn y se alentó una fuerte racionalización del aparato estatal. Y aunque la resistencia desatada al interior de la UCRI obligó al gobierno a comprar la mayoría de las empresas subastadas en 1958, los intentos destinados a reorganizar al grupo y alentar la instalación de nuevas industrias no contaron con el apoyo económico oficial.

Por fin, la privatización de las empresas durante 1961 se llevó adelante bajo el objetivo principal de comprimir el déficit fiscal. A pesar de que DiNIE no constituía la fuente principal de ese déficit, la venta de sus empresas se realizó en forma expeditiva. Luego de un largo período en que las empresas no habían recibido inversiones de importancia, se alentó una rápida transferencia. Más importante aún, las fábricas estatales fueron vendidas a cooperativas de trabajadores y a pequeñas firmas con escasa o nula capacidad financiera. En estas condiciones, acentuadas por una coyuntura económica caracterizada por una fuerte recesión entre 1962 y 1963, no es sorprendente que las empresas privatizadas exhibieran en los siguientes años una evolución negativa. En este sentido, antes que constituir un éxito, la privatización de 1961 se presenta como un fracaso en el intento gubernamental por transferir a la esfera privada los recursos humanos y económicos que bajo su órbita habían sido desperdiciados durante años.

Cuadro 1

Distribución por grupos del valor de la producción de la DiNIE, 1954-1957

En millones de pesos corrientes y porcentaje sobre el total

	1954/55		1955/56		1956/57	
	Miles de \$	Porcentaje	Miles de \$	Porcentaje	Miles de \$	Porcentaje
Farmacéutica	52,1	5,1	59,6	5,5	69,4	4,9
Química	61,1	6,0	78,3	7,2	89,9	6,4
Metalúrgica	168,2	16,5	168,7	15,6	192,8	13,8
Eléctrica	179,5	17,6	219,3	20,3	243,1	17,4
Textil	123,0	12,1	144,3	13,4	203,8	14,6
Varias	24,6	2,4	11	1	63,0	4,5
Subtotal Ind. manufacturera	608,4	59,7	698,1	64,9	842,0	60,4
Construcción	409,6	40,3	377,2	35	530,3	38,0
Total	1018	100	1075,3	100	1392,3	100

Fuente: Elaboración propia en base a DiNIE, *Reseña de las actividades del organismo desde el 28 de septiembre de 1955*, Bs. As., Abril de 1958.

Cuadro 2: Patrimonio, base de remate y precio de adquisición de las ex empresas alemanas de la DiNIE, 1958 (En miles de pesos)

Fecha	Empresa subastada	Patrimonio	Base*	Base/ Patrimonio	Precio de compra	Precio de compra / base	Comprador	Plazo de pago
23/6/58	Merck Química	s/d	20.000	-	20.000	100 %	Merck	4 años
23/6/58	Gunther Wagner SRL **	s/d	8.200	-	8.200	100 %	G. Wagner	6 años
23/6/58	Schering	s/d	17.200	-	17.200	100 %	Schering	4 años
17/7/58	Instituto Behring de Terapéutica Experimental	22.297	17.000	76 %	17.000	100 %	Química Hoesch	4 años
17/7/58	Osram	s/d	31.000	-	33.000	106 %	Osram	4 años
22/7/58	La Plata Ozalid	s/d	1.300	-	1.565	120 %	R. López	3 años
25/7/58	AEG	40.419	30.400	75 %	30.400	75 %	DiNIE	5 años
28/7/58	Monopol I y C	s/d	2.900	-	2.900	100 %	Bayer	3 años
31/7/58	Fáb. Arg. de Instalaciones Industriales	s/d	6.500	-	6.500	100 %	Miag Arg. SRL	3 años
31/7/58	SESGO Industria Textil	s/d	11.000	-	11.000	100 %	M. Shirinian	5 años
7/8/58	La Unión Bulonera	s/d	4.900	-	5.805	118 %	Mauricio Gold	3 años
13/8/58	Electrodinie (Siemens Schukert)	184.132	129.000	70 %	129.000	70 %	DiNIE.	10 años
13/8/58	Metaldinie (Tubos Mannesman)	163.159	122.000	75 %	122.000	75 %	DiNIE.	6 años
13/8/58	Ferrodinie (Thyssen Lametal)	212.437	149.000	70 %	149.000	70 %	DiNIE.	9 años
13/8/58	Crisoldinie (Crefin)	147.974	109.000	74 %	109.000	74 %	DiNIE.	10 años
15/10/58	La Química Bayer	80.565	56.400	70 %	42.300	52 %	Di.NIE	6 años
15/10/58	Anildinie (Anilinas Alemanas)	19.604	15.700	80 %	17.050	87 %	Di.NIE	4 años
15/10/58	Perfumerías Tosca	2.222	1.650	74 %	1.710	77 %	Di.NIE	3 años
22/10/58	CESIA Conductores Eléctricos	4.344	3.300	76 %	5.275	121 %	I.M.S.A.	3 años
22/10/58	Beiersdorf	1.136	900	79 %	680	60 %	Raylop SRL	3 años
22/10/58	Arbizu y Cervino	10.659	7.500	70 %	5.625	53 %	Di.NIE	4 años
22/10/58	Robert Bosch	1.710	1.200	70 %	1.575	92 %	Di.NIE	3 años
29/10/58	INAG	42.614	32.000	75 %	24.000	56 %	Di.NIE	6 años
29/10/58	FAPEN (Springer & Moller)	16.738	12.500	75 %	13.500	81 %	Di.NIE	4 años
29/10/58	Motordinie (Deutz Otto)	13.899	9.800	70 %	12.010	86 %	Di.NIE	3 años
5/11/58	GEOPE	73.952	54.000	73 %	36.450	49 %	Di.NIE	10 años
5/11/58	Gruen & Bilfinger	116.794	87.500	75 %	59.062	67 %	Di.NIE	10 años
5/11/58	Siemens Bauunion	100.710	71.000	70 %	47.925	47 %	Di.NIE	10 años
5/11/58	Ways & Freytag	8.963	6.500	72 %	4.387	49 %	Di.NIE	8 años
-	-	-	1.016.400	-	930.950	91 %	-	-

Fuente: Elaboración propia en base a DiNIE, *Memoria y Balance. 1958*, Bs. As., 1959 y *Clarín*. Referencia: \* Base del primer remate, \*\* en posesión de la Junta



Cuadro 3

Endeudamiento bancario de la DiNIE, y créditos otorgados por el organismo, 1957-1960  
-en millones de pesos de 1960-

	1957	1958	1959	1960
Deudas bancarias	1.290,7	1.779,6	640,4	572,2
Deudas totales	4.199,4	4.391,4	2.832,9	2.385,2
Deudas bancarias/ Deuda total	31%	40%	23%	24%
Créditos con organismos del estado	1.144,0	1.752,8	1.029,9	1.051,4
Créditos totales	3.813,8	3.520,1	2.074,9	1.914,7
Créditos con el estado/total	30%	50%	50%	55%
Gastos financieros	199,7	195,6	157,9	145,2

Fuente: Elaboración propia en base a DiNIE, *Memoria y Balance*, 1958-1960, y serie histórica del IPC elaborada por el INDEC.

Cuadro 4: Empresas privatizadas, precio de venta y plazo de pago, 1961-1962

Decreto	Empresa privatizada	Precio de venta En miles de pesos	Compañía compradora	Plazo de pago
6.067/61	FANDET, FAET y Corporación de la Tejeduría Dom.	260.000	UCAL	10 % a la firma y 90 % en 10 cuotas anuales.
10.600/61	Anildinie	15.200	Catalit SAIC	20% a la firma y toma de posesión 80 % en 5 cuotas anuales.
11.092/61	IMPA (anexo Ciudadela)	40.000	Met. Balcarceña Automotriz SA	S/D
11.093/61	IMPA (Querandés)	135.256	IMPA (personal)	10 cuotas anuales.
11.013/61	FADAE (A.E.G.)	25.000	FADAE SA (personal)	10 % a la firma y 90 % en 10 cuotas anuales
11.014/61	Industria Argentina de Electromedicina	31.000	IMFA, (Industria de Materiales Fotográficos Argentinos) SACI	10 % a la firma y toma de posesión. 90 % en 20 cuotas semestrales.
11.015/61	Metaldinie	162.000	FADAMET	10 % a la firma, posesión y 180 días. 90 % en 10 cuotas anuales
11.016/61	Obras Hidráulicas	44.700	OHEN SA (personal)	5 % a la firma y toma de posesión. 95 % en 21 cuotas semestrales.
11.094/61	Hormical (Ways & Freytag)	1.000	Hormical SRL (personal)	10 % a la toma de posesión. 90 % en 5 cuotas anuales.
11.185/61	Motordinie	1.250	Motordinie SA (personal)	5 % seña, 10 % a 180 días y 85 % en 9 cuotas anuales.
11.257/61	Crisoldinie (Crefin)	90.000	Cía Americana de Aceros SA	10 % seña y toma de posesión. 90 % en 8 cuotas anual.
11.291/61	Fábrica Argentina de Pinturas (Springer & Moller)	32.500	Marubla SA	31 % a la toma de posesión. 69 % en 5 cuotas anuales.
11.759/61 11.761/61	GEOPE y COPEN	32.000	GEOSA SA (personal)	S/D
11.760/61	Ferrodinie (Thyssen Lametal)	500.000	RYCSA	S/D
699/62	Laboratorio Fortius (Química Bayer)	89.355	Municipio de Buenos Aires	Al contado
1.440/62	Electrodinie (Siemens Schuckert)	43.000	Electrodinie SA (personal)	5 % al tomar posesión, 5 % a los 180 días. 90 % en 10 cuotas anuales

Fuente: Elaboración propia en base a *Boletín Oficial de la República Argentina*, 1960-1962.

## Cuadro 5

Evolución de seis firmas privatizadas. Número de obreros y facturación anual, 1961 y 1968.

-en millones de pesos de 1960-

Empresa	1961		1968	
	Personal	Facturación	Personal	Facturación
Catalic S.A. (Anildinie)	-	10*	10	9
Cía Americana de Aceros (Crisoldinie)	574	167*	35	36
Electrodinie	1031	396*	297	71
FADAE	521	158*	S/d	47
IMPA	630	141*	500	s/d
Motordinie	73	18**	24	18

Fuente: Elaboración propia en base a *La Nación* (1961) y *Enciclopedia de Industria y Comercio. Empresas y Ejecutivos*, Bs. As, Ediciones Ameco, 2 Vol., 1969. Deflactado en base a serie histórica del IPC elaborada por el INDEC. Referencias: \* 9 meses. \*\* 12 meses.

**UBICACIÓN CUADROS**

Cuadro 1: p. 11.

Cuadro 2: p. 22.

Cuadro 3: p. 29

Cuadro 4: p. 33

Cuadro 5: p. 35